

Como armonizar la política con la economía

Henry Kissinger

Por primera vez en la historia ha surgido un sistema económico auténticamente global con perspectivas de un bienestar no imaginado hasta ahora. Al mismo tiempo –paradójicamente– el proceso de globalización tienta a un nacionalismo que pone en peligro su consumación.

La premisa básica de la globalización es que la competencia distingue a los más eficientes, un proceso que, por definición, implica ganadores y perdedores. Si hay perdedores permanentes, éstos recurrirán a sus instituciones políticas conocidas para buscar alivio. No los tranquilizará la proposición válida de que los beneficios del crecimiento global superan holgadamente sus costos. Por otro lado, para seguir siendo competitivos, muchos países se ven obligados a reducir su legislación social, tarea destinada a generar protestas internas.

En los países industrializados, la globalización afecta la política interna de dos maneras: una productividad más alta genera la paradoja de un mayor bienestar acompañado por más desempleo. Al mismo tiempo, se produce un abandono de los trabajos serviles, que son realizados entonces por inmigrantes. Se producen un choque de culturas y un nacionalismo que favorecen la exclusión.

Esta tendencia se da aun dentro del sector productivo del mundo industrializado. Las empresas transnacionales, conectadas por Internet a instituciones financieras e industriales similares en el mundo entero, operan en el mercado global atendido por empleados que suelen tener gestiones más prolongadas que los gobiernos y menos restricciones en sus desempeños. Las empresas que siguen dependiendo de la economía nacional no suelen tener las mismas oportunidades.

En líneas generales, emplean la mano de obra con los salarios más bajos y las perspectivas menos prometedoras. Tienden a depender de mercados más limitados y de procesos políticos nacionales. Las compañías transnacionales defienden el libre comercio y el libre movimiento de capitales; las compañías nacionales (y los sindicatos) promueven generalmente el proteccionismo. El impacto estratégico de la globalización plantea quizá los problemas más importantes en dos niveles: ¿hay industrias indispensables para la seguridad nacional en las cuales la inversión extranjera deba limitarse o incluso prohibirse? Segundo, ¿qué sectores no hay que dejar caer para mantener el potencial de defensa de cada país? Las respuestas a estas preguntas se prestan claramente a abusos. Pero esto no es excusa para eludir lo que el interés nacional dicta que es necesario enfrentar.

El sistema internacional se ve, pues, ante una paradoja. Su prosperidad depende del éxito de la globalización, pero ese proceso produce una dialéctica susceptible de actuar en contra de su aspiración. Los responsables de la globalización tienen pocas oportunidades de manejar sus procesos políticos. Los responsables del proceso político tienen incentivos no siempre congruentes con los responsables económicos. Esta brecha debe eliminarse o por lo menos achicarse. Como punto de partida, propongo las siguientes pautas de orientación: El primer imperativo es reconocer que estos problemas opacan un gran éxito. El debate sobre las desventajas del proceso no debe degenerar en ataques contra su estructura conceptual básica. Los líderes políticos deben evitar el proteccionismo que llevó al desastre de la década del 30.

Los parámetros respecto de las limitaciones a la globalización en el área de seguridad nacional deben establecerse a nivel nacional y no quedar librados a grupos de presión, a lobbistas o a la política electoral. Por ejemplo, la próxima administración en EE.UU. debe crear una comisión

bipartita en el más alto nivel para estudiar lo que constituye una base tecnológica e industrial estratégica estadounidense indispensable y las medidas para preservarla.

Una de sus principales prioridades debe ser estudiar a fondo un sistema educativo que está generando muy pocos ingenieros y tecnólogos en comparación con nuestros competidores. El criterio debe apuntar a qué es lo esencial para la seguridad nacional, no a proteger a las empresas de la competencia que son fundamentales para el crecimiento global.

Las instituciones económicas internacionales tendrán que ser relevantes para los desafíos económicos y sociales actuales. La cumbre anual de los ocho jefes de Estado (el G-8) se originó en 1975 como una reunión de seis democracias industriales para trazar su futuro económico y social durante la primera crisis energética.

Para seguir siendo competitivos, muchos países reducen su legislación social, lo que genera protestas internas (Canadá se sumó en 1976; Rusia en 1998). En el primer encuentro realizado en Rambouillet, a cada país se le permitieron solamente tres participantes, con el presidente incluido, y un integrante del gabinete para facilitar la discusión plena y franca. Desde entonces, las reuniones degeneraron en grandes asambleas que cumplen esencialmente funciones políticas.

Deberían volver a su propósito original, dedicado principalmente a temas que afectan la salud de la economía global a largo plazo, entre otras cosas dar a las sociedades que quedaron rezagadas oportunidades de participar en el crecimiento global. En ese proceso, deberían ser incluidos India, China y potencialmente Brasil.

El Fondo Monetario Internacional tal como está constituido actualmente es un anacronismo. Fue creado para enfrentar crisis derivadas de préstamos tomados u otorgados por el Estado. Fue un espectador en las crisis financieras del siglo XXI, que han sido producidas por prácticas dentro de los sectores privados. El FMI intentó adaptarse a las nuevas circunstancias pero con demasiada lentitud; tiene que ser reformado.

En suma, si la brecha entre los órdenes político y económico del mundo no se achica de manera considerable las dos estructuras acabarán debilitándose mutuamente.

Disponível em: <<http://www.ee.clarin.com>> Acesso em: 3/6/2008.